

**Pacto Internacional de Derechos  
Civiles y Políticos**

Distr. general  
7 de diciembre de 2015  
Español  
Original: inglés

**Comité de Derechos Humanos****Comunicación núm. 2141/2012**

**Dictamen aprobado por el Comité en su 115º período de sesiones  
(19 de octubre a 6 de noviembre de 2015)**

|   |   |
|---|---|
| <i>Presentada por:</i>                          | Philippe Arkadyevich Kostenko<br>(representado por los abogados Olga<br>Tseytlina y Sergey Golubok)   |
| <i>Presunta víctima:</i>                        | El autor  |
| <i>Estado parte:</i>                            | Federación de Rusia   |
| <i>Fecha de la comunicación:</i>                | 28 de febrero de 2012 (presentación inicial)  |
| <i>Referencias:</i>                             | Decisión del Relator Especial con arreglo al<br>artículo 97 del reglamento, transmitida al<br>Estado parte el 21 de marzo de 2012 (no se<br>publicó como documento) |
| <i>Fecha de aprobación<br/>del dictamen:</i>    | 23 de octubre de 2015   |
| <i>Asunto:</i>                                  | Detención del autor y sentencia condenatoria<br>dictada en su contra por proferir palabras<br>obscenas contra la policía  |
| <i>Cuestiones de procedimiento:</i>             | Admisibilidad – agotamiento de los recursos<br>internos; admisibilidad – manifiestamente<br>infundada   |
| <i>Cuestiones de fondo:</i>                     | Detención y reclusión administrativas;<br>libertad de reunión; libertad de opinión y de<br>expresión; libertades necesarias en una<br>sociedad democrática          |
| <i>Artículos del Pacto:</i>                     | 14, 19 y 21   |
| <i>Artículos del Protocolo<br/>Facultativo:</i> | 2 y 5, párr. 2 b)   |



## Anexo

### **Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (115º período de sesiones)**

respecto de la

#### **Comunicación núm. 2141/2012\***

*Presentada por:* Philippe Arkadyevich Kostenko (representado por los abogados Olga Tseytlina y Sergey Golubok)

*Presunta víctima:* El autor

*Estado parte:* Federación de Rusia

*Fecha de la comunicación:* 28 de febrero de 2012 (presentación inicial)

*El Comité de Derechos Humanos*, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Reunido* el 23 de octubre de 2015,

*Habiendo concluido* el examen de la comunicación núm. 2141/2012, presentada al Comité de Derechos Humanos en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Habiendo tenido en cuenta* toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado parte,

*Aprueba* el siguiente:

### **Dictamen a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo**

1. El autor de la comunicación es Philippe Arkadyevich Kostenko, ciudadano de la Federación de Rusia nacido el 14 de enero de 1985. Afirma que la Federación de Rusia vulneró los derechos que le reconocen el artículo 14, párrafo 3 e), el artículo 19 y el artículo 21 del Pacto<sup>1</sup>. El autor está representado por los abogados Olga Tseytlina y Sergey Golubok.

#### **Antecedentes de hecho**

2.1 El autor indica que es un defensor de los derechos humanos y que fue víctima de una virulenta campaña de acoso orquestada por las autoridades. Entre 2008 y 2011 fue acusado de varios delitos (relacionados con la distribución de folletos, la colocación de carteles y la subversión de las normas por organizar concentraciones públicas y otras formas de activismo) y se le impusieron diversas multas, así como una pena de

---

\* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Yadh Ben Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany y Margo Waterval.

<sup>1</sup> El Protocolo Facultativo entró en vigor para la Federación de Rusia el 1 de enero de 1992.

15 días de cárcel que cumplió del 7 al 21 de diciembre de 2011. Este último día, inmediatamente después de haber cumplido la pena de 15 días, fue detenido nuevamente por la policía en San Petersburgo y acusado de proferir palabras obscenas en público. De la resolución judicial se desprende que el autor fue detenido y acusado en relación con unos hechos ocurridos el 16 de octubre de 2011. En esa fecha, el autor y varios otros activistas llevaron agua y alimentos a la comisaría para entregarlos a unos conocidos suyos que se encontraban reclusos. Los agentes de policía en la comisaría se negaron a aceptarlos y entonces se produjo un intercambio de palabras. La policía detuvo al autor y emitió un atestado policial en que lo acusaba de vandalismo leve, en concreto de proferir palabras soeces en público. El 22 de diciembre de 2011, el autor compareció ante el juzgado de paz del distrito judicial núm. 153 para ser procesado por esa infracción. Durante las actuaciones, el juez de paz rechazó todas las peticiones del autor, como la de conceder un aplazamiento y llamar a declarar a los agentes de policía, cuyos informes escritos eran las únicas pruebas de cargo presentadas en su contra. Ese mismo día, el autor fue condenado nuevamente a una pena de 15 días de cárcel.

2.2 El 23 de diciembre de 2011, el autor interpuso un recurso contra la condena ante el Tribunal de Distrito de Petrogradskiy, alegando, entre otras cosas, que el juzgado había utilizado como prueba las declaraciones de los agentes de policía, que se le había negado la posibilidad de interrogarlos y que la pena impuesta en su contra no guardaba proporción con la gravedad de la infracción cometida y vulneraba su libertad de expresión. El Tribunal de Distrito desestimó el recurso del autor el 26 de diciembre de 2011. En una fecha sin especificar, el autor, alegando básicamente los mismos argumentos, interpuso un recurso de revisión (control de las garantías procesales) ante el Tribunal Municipal de San Petersburgo, que lo rechazó el 13 de febrero de 2012. El autor cumplió la totalidad de su pena entre diciembre de 2011 y enero de 2012 en el centro de reclusión especial de la Dirección General de Interior, en San Petersburgo. En el momento en que se presentó la comunicación quedaban otras dos causas pendientes contra el autor.

2.3 El autor señala que, aunque teóricamente podría interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, considera que esa posibilidad no constituye un recurso efectivo y se remite a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a ese respecto. El autor sostiene que ha agotado todos los recursos internos disponibles y efectivos.

### **La denuncia**

3.1 El autor afirma que durante el juicio celebrado en su contra se cometieron violaciones graves de las normas procesales, así como de sus derechos constitucionales y procesales. Sostiene que, si bien se calificaron los cargos en su contra de administrativos, el proceso fue penal en el sentido del artículo 14 del Pacto, ya que podía ser condenado a una pena de cárcel y efectivamente lo fue. El autor, que durante las actuaciones sostuvo que las acusaciones eran falsas, señala que se le negó el derecho a interrogar a su vez a los testigos, cuyas declaraciones eran la única prueba de cargo presentada en su contra; sostiene que eso constituyó una vulneración de los derechos que lo asisten en virtud del artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto. También señala que esta irregularidad crucial redundó en desmedro de la imparcialidad general de las actuaciones penales de que fue objeto, en contravención del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

3.2 El autor señala asimismo que, por más que hubiera proferido palabras obscenas en público, la pena impuesta no guardaba proporción con la gravedad de la infracción. Habida cuenta de que dicha infracción consistió en una expresión verbal no violenta, como reconocieron los tribunales, la pena de cárcel conculcó los derechos que lo

asisten en virtud del artículo 19 del Pacto. El autor se remite a la observación general núm. 34 (2011) del Comité sobre la libertad de opinión y libertad de expresión, en que este hace hincapié en que cualquier restricción de la libertad de expresión debe cumplir pruebas estrictas de necesidad y proporcionalidad; y señala que dichas pruebas también deberían aplicarse a la pena impuesta. El autor se remite a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual la imposición de una pena de cárcel a una persona por ejercer la libertad de expresión solo está permitida en casos de incitación al odio o a la violencia, y señala que en su caso nunca se dio a entender que hubiera empleado un discurso de odio ni hecho incitación a la violencia.

3.3 El autor señala asimismo que, habida cuenta del contexto y de su perfil público, su encarcelamiento, basado en acusaciones manifiestamente infundadas y absurdas, tenía por objeto restringir su activismo, en particular no permitirle estar físicamente presente ni participar en las manifestaciones pacíficas celebradas en San Petersburgo en diciembre de 2011, lo que constituye una vulneración de los derechos que lo asisten en virtud del artículo 21 del Pacto.

3.4 El autor solicita que el Estado parte le proporcione una reparación adecuada que incluya una disculpa pública, la anulación de su condena y sus antecedentes penales, y el pago de una indemnización.

#### **Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad**

4.1 En sus observaciones del 17 de agosto de 2012 y el 17 de febrero de 2014, el Estado parte afirmó que el autor había sido declarado culpable de haber cometido una infracción administrativa prevista en el artículo 20.1, parte 1, del Código de Infracciones Administrativas (vandalismo leve) por el juzgado de paz del distrito judicial núm. 153 de San Petersburgo mediante fallo de fecha 22 de diciembre de 2011. Fue sentenciado a 15 días de reclusión administrativa, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo.

4.2 El 23 de diciembre de 2011, el abogado del autor interpuso un recurso de apelación contra esa resolución, alegando que sus derechos habían sido vulnerados. En particular, adujo que el juez se había negado a aplazar el examen de la causa, pese a los problemas de salud del autor. En el recurso se señaló que la defensa no había tenido la oportunidad de familiarizarse con el expediente de la causa, que los actos del autor no constituían una infracción administrativa, que el juzgado se había negado a tomar declaración a los testigos y que la pena impuesta era desproporcionada en relación con la gravedad del acto cometido. El 26 de diciembre de 2011, el Tribunal del Distrito de Petrogradskiy desestimó el recurso. El 13 de febrero de 2012, el Tribunal Municipal de San Petersburgo desestimó un nuevo recurso al considerar que los argumentos de la defensa carecían de fundamento. El Tribunal rechazó el argumento de que los actos del autor no constituían una infracción administrativa, pues no estaba corroborado por el atestado policial, en que se describían la naturaleza y las circunstancias de la infracción cometida (vandalismo leve). El Estado parte se remite a la definición de la infracción y señala que quedó establecido que el autor había proferido palabras soeces en un espacio público y había hecho caso omiso de las advertencias, con lo que incurrió en una falta manifiesta de respeto a la sociedad, por lo que su comportamiento había sido calificado correctamente con arreglo al artículo 20.1, parte 1, del Código de Infracciones Administrativas. El argumento de que se había vulnerado su derecho a defenderse no estaba corroborado por el expediente de la causa.

4.3 El Estado parte observa que el autor no interpuso recurso ante otro tribunal, incluido el Tribunal Supremo. Sostiene que, con arreglo al artículo 126 de la Constitución, el artículo 19 de la Ley Federal Constitucional sobre el Sistema Judicial

y el artículo 9 de la Ley Federal Constitucional sobre los Tribunales de Jurisdicción General, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia es la máxima instancia judicial en materia administrativa. Por tanto, el Estado parte sostiene que el autor no ha agotado todos los recursos internos disponibles, debido a lo cual, su comunicación es inadmisible en virtud de los artículos 2 y 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo.

### **Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte**

5.1 En su comunicación de 20 de septiembre de 2012, el autor indicó que el Estado parte había aducido que, en su caso, no se había infringido la aplicación de las disposiciones de derecho interno, en particular el Código de Infracciones Administrativas. El autor sostiene, sin embargo, que la esencia de su denuncia se refería a la vulneración de sus derechos humanos internacionalmente protegidos en virtud de los artículos 14, 19 (a la luz de la interpretación de esa disposición en la observación general núm. 34 del Comité) y 21 del Pacto. Lamenta que en las observaciones del Estado parte no se tengan en cuenta esas reclamaciones y no se haga siquiera mención del Pacto. Señala que el Estado parte no ha respondido a sus alegaciones y pide respetuosamente al Comité que se pronuncie en su favor.

5.2 Por lo que respecta a la afirmación del Estado parte de que no ha agotado los recursos internos, el autor sostiene que el recurso que se sugiere, la revisión por el Tribunal Supremo, no constituye un recurso efectivo a los efectos de la admisibilidad. El autor se remite a la jurisprudencia del Comité a ese respecto<sup>2</sup> y sostiene que el Estado parte no ha dado motivo alguno para que el Comité se aparte de esa jurisprudencia arraigada.

### **Deliberaciones del Comité**

#### *Examen de la admisibilidad*

6.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

6.2 En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

6.3 El Comité toma nota de que el Estado parte se ha opuesto a la admisibilidad de la comunicación por no haberse agotado los recursos internos, con arreglo a los artículos 2 y 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo, ya que el autor no recurrió ante el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, la máxima instancia judicial en materia administrativa. El Comité observa que las disposiciones del derecho interno a que se refiere el Estado parte, a saber, el artículo 126 de la Constitución, el artículo 19 de la Ley Federal Constitucional sobre el Sistema Judicial y el artículo 9 de la Ley Federal Constitucional sobre los Tribunales de Jurisdicción General no especifican un recurso en particular, sino que simplemente esbozan la función del Tribunal Supremo en el sistema jurídico nacional. El Comité observa también la comunicación del autor de que el único recurso que le quedaba sería solicitar una revisión. El Comité recuerda su jurisprudencia<sup>3</sup> en el sentido de que la presentación al presidente de un tribunal de un

<sup>2</sup> El autor se remite a la comunicación núm. 1866/2009, *Chebotaeva c. la Federación de Rusia*, dictamen aprobado el 26 de marzo de 2012, párr. 8.3, en que el Comité señaló que “los recursos de control de las garantías procesales contra decisiones judiciales que se hayan hecho efectivas constituyen un recurso extraordinario, que depende de la discrecionalidad del juez [...] y que, por tanto, no es necesario agotarlo a efectos de la admisibilidad”.

<sup>3</sup> Véanse las comunicaciones núms. 836/1998, *Gelazauskas c. Lituania*, dictamen aprobado el 17 de marzo de 2003, párr. 7.4; 1851/2008 *Sekerko c. Belarús*, dictamen aprobado el 28 de octubre

recurso de revisión respecto de una resolución judicial que ha entrado en vigor y está librado a la discreción del juez constituye un recurso extraordinario y el Estado parte debe demostrar que existe una posibilidad razonable de que dicha solicitud sirva de recurso efectivo en las circunstancias del caso<sup>4</sup>. Sin embargo, el Estado parte no ha indicado si, en causas relativas al derecho a un juicio imparcial o a la libertad de expresión, ha prosperado algún recurso de revisión presentado ante el Presidente del Tribunal Supremo y, en la afirmativa, en cuántas ocasiones. En tales circunstancias, el Comité considera que lo dispuesto en los artículos 2 y 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no obsta para que examine la presente comunicación.

6.4 El Comité toma nota de que el autor afirma que su encarcelamiento, basado en acusaciones manifiestamente infundadas y absurdas, tenía por objeto restringir su activismo, en particular impedirle estar físicamente presente y participar en las manifestaciones pacíficas celebradas en San Petersburgo en diciembre de 2011, lo que vulnera los derechos que le reconoce el artículo 21 del Pacto. A falta de otras informaciones detalladas y documentadas que corroboren esas alegaciones o indiquen si fueron o no planteadas ante la jurisdicción nacional, el Comité estima que, a efectos de la admisibilidad, esta parte de la comunicación no se ha fundamentado en medida suficiente y que, por lo tanto, es inadmisibles con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.5 El Comité declara admisibles las demás reclamaciones relativas al artículo 14, párrafo 3 e), y al artículo 19 del Pacto y procede a examinarlas en cuanto al fondo.

#### *Examen de la cuestión en cuanto al fondo*

7.1 El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

7.2 El Comité toma nota de las afirmaciones del autor de que fue detenido inmediatamente después de haber sido puesto en libertad tras cumplir una pena de prisión y acusado de haber proferido palabras groseras únicamente sobre la base de un informe elaborado por agentes de policía. El Comité toma nota, sobre la base de las resoluciones judiciales, de que el autor fue sometido a juicio y condenado en relación con unos hechos ocurridos el 16 de octubre de 2011, fecha en la que tuvo un altercado verbal con agentes de policía al querer entregar alimentos para unos conocidos suyos que se encontraban reclusos. El Comité toma nota de la afirmación del autor de que, por más que hubiera proferido palabras obscenas en público, el castigo que se le impuso no guardaba proporción con la gravedad de la infracción. Por consiguiente, la cuestión que debe considerar el Comité es si, al detener y acusar al autor de haber cometido una infracción administrativa y posteriormente condenarlo a 15 días de cárcel, el Estado parte restringió injustificadamente los derechos garantizados al autor en el artículo 19 del Pacto.

---

de 2013, párr. 8.3; 1999-1920/2009, *Protsko y Tolchin c. Belarús*, dictamen aprobado el 1 de noviembre de 2013, párr. 6.5; 1784/2008, *Schumilin c. Belarús*, dictamen aprobado el 23 de julio de 2012, párr. 8.3; 1814/2008, *P. L. c. Belarús*, decisión de admisibilidad adoptada el 26 de julio de 2011, párr. 6.2; 2021/2010, *E. Z. c. Kazajstán*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 1 de abril de 2015, párr. 7.3; 1873/2009, *Alekseev c. la Federación de Rusia*, dictamen aprobado el 25 de octubre de 2013, párr. 8.4; y 2041/2011, *Dorofeev c. la Federación de Rusia*, dictamen aprobado el 11 de julio de 2014, párr. 9.6.

<sup>4</sup> Véanse, a modo de ejemplo, *Dorofeev c. la Federación de Rusia*, párr. 9.6; 836/1998, *Gelazauskas c. Lituania*, párr. 7.4; *P. L. c. Belarús* párr. 6.2; comunicaciones núms. 1785/2008, *Oleshkevich c. Belarús*, dictamen aprobado el 18 de marzo de 2013, párr. 7.3; *Schumilin c. Belarús*, párr. 8.3; 1839/2008, *Komarovsky c. Belarús*, dictamen aprobado el 25 de octubre de 2013, párr. 8.3; 1903/2009, *Youbko c. Belarús*, dictamen aprobado el 17 de marzo de 2014, párr. 8.3; y 1929/2010, *Lozenko c. Belarús*, dictamen aprobado el 24 de octubre de 2014, párr. 6.3.



7.3 El Comité recuerda que, con arreglo al artículo 19, párrafo 3, del Pacto, se permiten ciertas restricciones, pero solo en la medida en que estén fijadas por la ley y sean necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. El Comité señala además que toda restricción al ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 19, párrafo 2, debe cumplir pruebas estrictas de necesidad y proporcionalidad y debe estar relacionada directamente con la necesidad específica de la que depende<sup>5</sup>.

7.4 El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que el autor fue detenido porque había proferido palabras groseras en público, en contravención del artículo 20.1, parte 1, del Código de Infracciones Administrativas, y que su condena se impuso de conformidad con la legislación nacional. El Comité también toma nota de que el autor afirma que estaba expresando su oposición a las acciones de la policía. El Comité observa que la aprehensión, detención y condena del autor tuvieron como resultado una restricción de su libertad de expresión y opinión. A este respecto, el Comité recuerda que corresponde al Estado parte demostrar que la restricción impuesta era necesaria en el caso en cuestión para uno de los fines legítimos previstos en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto<sup>6</sup>. El Comité observa que el requisito de la necesidad lleva en sí un elemento de proporcionalidad, en el sentido de que el alcance de la restricción impuesta a la libertad de expresión debe ser proporcional al valor que se pretenda proteger con esa restricción<sup>7</sup>. El Comité observa que, si bien el Estado parte parece dar a entender que la condena y pena del autor eran necesarias a efectos de la protección del orden público, no ha dado explicación alguna en cuanto a los motivos por los que era necesario y proporcionado volver a detener al autor dos meses después de los hechos e imponerle la pena máxima prevista por la ley, a saber, 15 días de cárcel, pena que cumplió. Aun en el supuesto de que su detención y reclusión tenían fundamento en el derecho interno y que su condena obedecía a un objetivo legítimo, como proteger el orden público, no es posible afirmar que esas restricciones eran necesarias y proporcionadas para alcanzar dicho objetivo.

7.5 En esas circunstancias, y al no haber presentado el Estado parte otra información pertinente que justifique la restricción a los efectos del artículo 19, párrafo 3, el Comité concluye que se vulneraron los derechos reconocidos al autor por el artículo 19, párrafo 2, del Pacto.

7.6 El Comité toma nota de que, según el autor, durante la vista judicial se le negó la posibilidad de interrogar a su vez a los agentes de policía, cuyas declaraciones eran la única prueba que lo incriminaba, en contravención de los derechos que le reconoce el artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto. El Comité recuerda que el artículo 14, párrafo 3 e), garantiza el derecho de las personas acusadas a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo<sup>8</sup>. Observa también que las protecciones que otorga el artículo 14 a los acusados en causas penales se aplican también a las personas acusadas de infracciones administrativas que puedan acarrear la imposición de sanciones que, independientemente de su

<sup>5</sup> Véase la observación general núm. 34 (2011) del Comité, sobre la libertad de opinión y la libertad de expresión, párr. 22. Véase también, a modo de ejemplo, la comunicación núm. 1948/2010, *Turchenyak y otros c. Belarús*, dictamen aprobado el 24 de julio de 2013, párr. 7.7.

<sup>6</sup> Véase también, a modo de ejemplo, *Turchenyak y otros c. Belarús*, párr. 7.8.

<sup>7</sup> Véase la comunicación núm. 1128/2002, *Marques de Morais c. Angola*, dictamen aprobado el 29 de marzo de 2005, párr. 6.8.

<sup>8</sup> Véanse la observación general núm. 32 (2007) del Comité, sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 39, y las comunicaciones núms. 1758/2008, *Jessop c. Nueva Zelandia*, dictamen aprobado el 29 de marzo de 2011, párr. 8.6, y 1769/2008, *Bondar c. Uzbekistán*, dictamen aprobado el 25 de marzo de 2011, párr. 7.5.

calificación en el derecho interno, deben considerarse penales por su objetivo, carácter o gravedad<sup>9</sup>. Dado que el Estado parte no ha proporcionado información sobre los motivos por los que se denegó el contrainterrogatorio de los únicos testigos principales, el Comité concluye que los hechos presentados por el autor constituyen una vulneración de los derechos que le reconoce el artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto.

8. El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación por la Federación de Rusia del artículo 14, párrafo 3 e), y el artículo 19, párrafo 2, del Pacto.

9. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Esto significa que el Estado parte debe proporcionar plena reparación a las personas cuyos derechos en virtud del Pacto hayan sido violados. Por tanto, el Estado parte está obligado a ofrecer al autor una indemnización adecuada y el reembolso de las costas. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

10. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y jurídicamente exigible cuando se haya determinado que se ha producido una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé amplia difusión en el idioma oficial del Estado parte.

---

<sup>9</sup> Véase la observación general núm. 32 del Comité, párr. 15.